

Atentado en Victoria: caso eleva a cuatro los trabajadores dependientes de la empresa muertos desde 2022

El asesinato de Manuel León y las graves heridas de César Osorio desataron una condena transversal del sector productivo, que calificó el ataque como "terrorista" y reclamó medidas urgentes ante escalada de violencia rural.

Prensa La Tribuna
prensa@latribuna.cl

La muerte del trabajador forestal Manuel León en Victoria generó una condena transversal dentro del mundo empresarial, así como renovados llamados al Gobierno para que adopte medidas decisivas contra la escalada de violencia en la Macrozona Sur, en momentos en que la región se mantiene bajo estado de excepción constitucional.

Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de Empresas CMPC, calificó el ataque como un "acto de carácter terrorista" y reveló que la compañía ha perdido cuatro trabajadores por atentados similares desde 2022. El ejecutivo, quien se trasladó hasta Victoria para acompañar a las familias afectadas, enfatizó que no se trata solo de un ataque contra la industria forestal, sino "contra personas y familias trabajadoras".

Manuel León, de 60 años, murió tras recibir disparos cuando realizaba labores de patrullaje nocturno junto a César Osorio, de 50 años, quien permanece grave en la UTI del Hospital de Victoria con tres impactos de bala. Luego, fue trasladado a Temuco para recibir atención

especializada por las heridas sufridas en el ataque ocurrido en el sector Selva Oscura.

El directivo de Empresas CMPC recordó las alarmantes cifras de violencia rural: "En el sector forestal se han registrado más de 500 ataques en la última década, casi 50 por año, una situación insostenible para cualquier actividad productiva y para la vida de las comunidades".

CONDENA TRANSVERSAL

La Corporación Chilena de la Madera (Corma), a través de su presidente Rodrigo O'Ryan, condenó "con toda la fuerza este cobarde y brutal ataque" y advirtió que la violencia se ha transformado en "una amenaza permanente para quienes trabajan en el sur de Chile".

O'Ryan contextualizó el atentado y recordó que solo horas antes se había registrado otro ataque en Carahue, donde fueron incendiadas múltiples maquinarias forestales. "El nivel de violencia ya es insostenible, y si el Estado baja la guardia podríamos pasar a lo que antes solo veíamos en países tomados por el narcoterrorismo", alertó.

Por su parte, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) emitió una declaración en la que exigió que "los asesinos



EL GERENTE GENERAL DE CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, detalló que los trabajadores portaban chalecos antibalas al momento del ataque, el que no fue efectivo ante las armas de grueso calibre.

sean identificados y sancionados con el máximo rigor de la ley", a la vez que pidió al Gobierno "actuar con urgencia y determinación para garantizar el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad".

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), representada por su presidente Antonio Walker, lamentó que quienes viven y trabajan en zonas rurales estén "expuestos a situaciones de violencia inaceptables, propias de la ausencia de garantías mínimas de seguridad".

CMPC RECHAZA RESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD

Francisco Ruiz-Tagle fue enfático al señalar que no corresponde a las empresas privadas asumir funciones de seguridad que son propias del Estado. "Creo que no hay ninguna medida de seguridad que nos pudiese defender de una emboscada nocturna con armamento de grueso calibre", sostuvo.

El gerente general de Empresas CMPC confirmó que los trabajadores portaban chalecos antibalas al momento del ataque, pero recalcó que "no nos corresponde a nosotros tomar medidas extremas de seguridad" y que la responsabilidad de proteger a los ciudadanos recae en "la autoridad policial y el Estado".

La empresa anunció que tomará "todas las medidas necesarias con las fiscalías, las policías y nuestros propios abogados" para proceder judicialmente contra

los responsables, mientras colabora activamente con la investigación del caso.

El hecho ocurrió pese a que la región se mantiene bajo estado de excepción constitucional, lo que según los empresarios demuestra "la osadía de quienes están detrás" de estos ataques y

la necesidad de estrategias más efectivas.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, confirmó que Carabineros, la PDI y el Ejecutivo están "coordinados para que se realicen todas las diligencias que permitan esclarecer lo sucedido".

"Más que una afectación o un atentado al sector forestal, lo que se está haciendo aquí es un atentado a una familia, a un trabajador inocente que además ha sido emboscado en una situación sorpresiva en la noche y muy gravemente con armamento de guerra"

Francisco Ruiz-Tagle,
gerente general de Empresas CMPC

"No se trata de un problema exclusivo de las forestales. Es un atentado contra la paz, contra la convivencia democrática y contra el derecho de todas las familias a vivir tranquilas, a trabajar con dignidad y a tener la certeza de que cada día volverán sanos y salvos a sus hogares"

Rodrigo O'Ryan,
presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma)

"Quienes viven y trabajan en zonas rurales están expuestos a situaciones de violencia inaceptables, propias de la ausencia de garantías mínimas de seguridad que el Estado tiene la obligación de garantizar"

Antonio Walker,
presidente Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)



FRANCISCO RUIZ-TAGLE recordó que el sector forestal ha sido víctima de más de 500 ataques durante la última década —casi 50 por año—.